



En apariencia, este no sería el mejor momento para pedir la autonomía desde una institución como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). No sólo por el ambiente, tan cargado, que contra las autónomas han generado las críticas desde el Poder Ejecutivo (y desde medios de comunicación cercanos a la SEP, como TV Azteca), sino porque prácticamente durante un siglo no hay una década en que los estudiantes y trabajadores que han luchado por la autonomía o desde la autonomía no hayan sido objeto de represión simbólica o violenta: modificaciones constitucionales, campañas en los medios, descalificaciones desde el poder, pero también ahí está el 68 y sus muchos universitarios muertos por protestar, y el año 2000 con casi mil alumnos universitarios encarcelados y no pocos a juicio por su huelga contra colegiaturas, limitaciones a la permanencia y exámenes Ceneval.

Al mismo tiempo, numerosas intervenciones gubernamentales para cambiar a leyes orgánicas que concentran el poder en los directivos o alteran profundamente la vida institucional (reducción de derechos laborales, establecimiento de becas, estímulos, acreditaciones, evaluaciones discriminatorias para el acceso, reglamentos, no pocas veces todo esto con fuertes implicaciones clasistas y misóginas). Es claro, como

notaban el rector Barros Sierra y Cristina Barros, que el Estado sigue viendo a la universidad como algo lejano, ajeno, hostil. De hecho, ni siquiera la considera como referente y prefiere generar otras opciones que, por cierto, no han tenido mucho éxito.

En realidad, la universidad autónoma se ha constituido como parte intrínseca de la historia nacional y su itinerario académico-científico, pero también lo social y político le ha dado un enorme atractivo. A pesar de las estructuras institucionales impuestas desde fuera, que muchas veces son excluyentes y concentran en demasía el poder institucional, la autonomía genera un especial y muy necesario sentido académico crítico, de comunidad y libertad, así como de relación más cercana y cuestionadora del poder.

Todo esto, de manera masiva atrae a jóvenes de 15 y 18 años y sus familias, así como a egresados que buscan hacer carrera académica y a empleadores. Los mismos funcionarios gubernamentales, al seguir impulsando candidaturas afines para altos puestos universitarios, con esa indebida injerencia, no dejan de reconocer que la universidad es un espacio del que no pueden desentenderse.

Lázaro Cárdenas, a pesar de que inicialmente presionó a las universidades a que adoptaran como referencia la educación socialista, pronto cambió de opinión. Midió bien el momento político y la reacción de los rectores, pero especialmente la de los jóvenes estudiantes de la universidad que se dedicaron a seguirlo en sus giras y mítines por todo el país para defender la autonomía y la importancia de la libertad de pensamiento (Susana Quintanilla: *La educación en México, periodo Lázaro Cárdenas*). Y a pesar de que en el gobierno anterior, por ley, la hoy UNAM había sido despojada de la palabra Nacional y cancelado su subsidio regular, Cárdenas ordenó que se le restituyera el apoyo económico y, junto con las demás instituciones, finalmente no la incluyó en la obligación constitucional de impulsar la educación socialista (A mi juicio, un socialismo que quiera arraigarse requiere de espacios como la autonomía y la libertad de pensamiento), pero Cárdenas tampoco tocó la autonomía de gobierno de la universidad, donde el Consejo Universitario -integrado en su enorme mayoría, por estudiantes y profesores y sólo 10 por ciento, por funcionarios- era el encargado de elegir libremente al rector que consideraran apropiado y también de conducir la institución desde 1933 (y hasta 1945). Y considero que es precisamente en esta historia y en esta perspectiva

que tiene lógica y sustento la demanda de los universitarios de la UPN. Pienso que después de más de 40 años de vivir como universidad en dependencia directa de la SEP, ya se han explorado sus posibilidades y, a pesar de todas las limitaciones y problemáticas de la autonomía severamente limitada que hoy tenemos y que bien conocen, la prefieren.

El país ganaría una enormidad: una universidad que tiene sedes en prácticamente todo el país, que es sumamente austera (nada de ingresos dorados), que aprendió a luchar contra el corporativismo del SNTE y que tiene un potencial increíble si se la deja ser la universidad de la educación del país. Un centro nacional pero ya asentado y presente en todas las regiones del país puede ser un espacio vital de reflexión y transformación de la educación. La lección de Lázaro Cárdenas es aplicable: la autonomía es válida, el Estado mexicano puede aceptarla, convivir con ella y respetarla. Me solidarizo con su demanda.

Hugo Aboites es profesor investigador de la UAM-Xochimilco